

PRÓLOGO

La Justicia argentina no registra precisamente un desarrollo ejemplar en cuanto a la asepsia de su desempeño. Además del descrédito por la comprometida actitud corporativa de ciertos magistrados en circunstancias críticas de nuestra historia, la cuestionada idoneidad profesional y ética de algunos de sus elencos, las carencias infraestructurales, las limitaciones presupuestarias y los obstáculos burocráticos, han compuesto un universo de argumentaciones descalificadoras que, de boca en boca, han ido desprestigiando en relato el carácter de su investidura, casi con la misma virulencia con la que se ha ido gestando ese especial desazón colectivo respecto de su virtuosidad para satisfacer expectativas sociales.

Aun así, frente al horror de una tragedia, frente a la impunidad de un abuso, frente a la contrariedad de un incumplimiento, la gente sigue reclamando justicia. Y cuando reclama Justicia espera una respuesta jurisdiccional aceptable, porque a pesar de los obstáculos apuntados, aparentemente la confianza en la Justicia y en la institucionalidad legal se mantiene, casi como se mantiene idílicamente la institucionalidad democrática frente a la memoria del horror de la barbarie dictatorial.

La administración de justicia no es un ámbito social restringido a la interacción de funcionarios judiciales y justiciables. La labor de los auxiliares de la justicia y en particular de los abogados y las abogadas de parte resulta esencial, principalmente porque su gestión es imprescindible para la mejor defensa de los derechos controvertidos. Su apreciación del funcionamiento institucional nos instruye acerca de las ventajas y falencias de este y, sus consideraciones merecen especial atención, dado que, en su carácter de profesionales del derecho, su experiencia puede proporcionar la mejor mensura sobre las prácticas organizacionales involucradas.

Justamente esta obra, que ha llegado a mis manos en el contexto particular de la pandemia, centra su desarrollo en indagar la apreciación vívida de quienes son responsables de asistir, defender, patrocinar o representar a los justiciables en el respaldo de sus pretensiones por ante los estrados judiciales. Desde allí, nos convoca a considerar el alcance de la confianza que éstos le asignan a esa administración.

Adelanto que se trata de un trabajo que, conociendo a trayectoria de varios miembros del equipo de investigación, merece toda mi estima y confianza en cuanto a la calidad de la labor realizada. Entre ellos destaco a Olga Salanueva, Ines Berisso y José Orlor como brillantes exponentes de la producción académica de la Universidad Nacional de La Plata, con quienes he compartido memorables eventos y congresos de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica.

Analizando la obra, puedo apreciar aspectos que resultan sugestivos para destacar desde su inicio. El título, ya en su enunciado, contiene elementos que merecen atención previa. Por un lado, nos propone escuchar la voz de esos actores, atender qué es lo que dicen. No como un coro que reitera los supuestos del designio divino, como sucede en las tragedias griegas. Ese coro, cual rumor, se difumina cotidianamente por los espacios más recónditos de la comunicación social. En la investigación que exhibe este texto en cambio, se propone situar al abogado en un lugar central, como personaje solícito, donde su actividad profesional protagoniza y oficia de máscara para hacer sonar el desarrollo de la trama argumental que persigue la realización de justicia. Si esa representación alegórica se me permite, la catarsis podrá verse en que el derecho sea cumplido. Nada más gráfico para acreditarlo que, la práctica impuesta en la norma de estilo del derecho argentino que dispone clausurar los escritos de parte con la consigna “Será Justicia”. Este protagonismo convoca a los abogados y las abogadas a evaluar la confianza en la administración de justicia desde su particular situación de auxiliares del sistema.

Por otro lado, es interesante destacar el empleo de lenguaje inclusivo en la obra, el que estoy convencido no surge solo de un compromiso militante, sino de la convicción que el uso del lenguaje crea realidades, especialmente en lo referido al respeto por la perspectiva de género y la diversidad social. Creo yo que es un acierto, que reivindica una larga lucha en la prestigiosa labor de investigación y docencia de la Dra. Olga Salanueva y de su equipo.

En cuanto al abordaje metodológico que sugiere la propuesta investigativa de este texto, a priori, me invita a considerar un par de elementos destacables. Uno, el recorte del marco de investigación dentro del enclave territorial del departamento judicial de La Plata. El otro, el encuadre conceptual que prioriza el indicador confianza. No es un dato menor poner de relieve tales recortes. En principio porque el acotamiento de campo resulta promisorio para la eficacia material del confornte empírico. Además, hay que

tener en cuenta que el departamento judicial objeto de la investigación resulta uno de los más significativos, no solo por el número de sus matriculados, sino y especialmente, por concentrar la actividad judicial del ejido territorial de la capital de la provincia más importante del país tanto por su extensión, su cantidad de población como por la actividad económica que involucra. En función de tales características no corresponde se aprecie la obra solo como la expresión de una localía, ya que los datos relevados merecen cobrar atención como reseña referencial de las prácticas judiciales del país.

Por otro lado, trabajar sobre indicadores de confianza resulta ser una actividad ardua. El registro y análisis de los estándares de confianza dentro de una población suele ser una de las tareas más desafiantes y complejas con la que se enfrentan los investigadores sociales. La confianza no se concentra en una definición conceptual (o teóricamente) cerrada, sino que involucra en la práctica un entramado de consideraciones que abarcan opiniones, creencias y conocimientos que se conjugan con aristas diferenciales, conforme las experiencias resulten transversalizadas por eventos históricos, contextos políticos y acervos culturales. En sí, la confianza también adquiere matices distintivos en la medida que deambula entre diversos contingentes sociales y se ve transversalizada por los eventuales posicionamientos que los individuos tienen dentro de la estructura social, obviamente conformando con ello el potencial identificador que tienen con los imperativos que conminan su inserción dentro de la estructura de producción. La confianza no es un elemento estable y su labilidad se desliza por las pendientes irregulares que rozan tanto los saberes como las circunstancias emocionales a los que acceden. Así, las opiniones se presentan buriladas por las experiencias subjetivas y se enlazan en las percepciones sesgadas que dan crédito a los pareceres propios; las creencias a su vez van involucrando bagajes compartidos, enfatizando la fidelidad promisorio con valores y simbologías empáticas, y finalmente, el capital cognitivo va dando cuenta de los aciertos adquiridos en procesos individuales y colectivos de instrucción formal e informal transcurridos. Tal enjambre datal resulta siempre difícil de sintetizar al investigador, especialmente cuando pretende integrarlo en categorías lo suficientemente representativas y apreciables de rigorismo científico.

La labor debe ser encarada a partir de un encuadre metodológico adecuado, principalmente si el recorte de lectura involucra actores dentro de un marco

institucional complejo -como lo es el ámbito de desempeño del profesional del derecho-, y si la pesquisa se orienta a relacionar su ponderación respecto de la organización judicial. Aun contemplando tamaña complejidad, esta obra responde ejemplarmente al desafío.

Hay que destacar que este libro difunde magistralmente los resultados de una investigación sociojurídica acreditada por la Universidad Nacional de La Plata, elaborada por un equipo que viene trabajando desde hace más de una década en el análisis de las problemáticas jurídicas y sociales que inciden en el ejercicio de la profesión y en la organización de justicia. En este caso, su labor ha registrado las respuestas de abogados y abogadas sobre las opiniones que tienen de dicha administración, poniendo especial consideración sobre los contenidos que refieren la confianza que tienen en ella, en sus jueces y en sus sentencias. La opción metodológica adoptada de recurrir al confronte empírico a través de correos electrónicos, a su vez, les ha permitido registrar un universo de respuestas válidas rico en observaciones, ya que de esa forma han podido desarrollar una extensa y ambiciosa encuesta.

La muestra, planteada en demandas semiestructuradas sobre diversos ítems, evalúa niveles de confianza sobre la calidad de la administración, la extensión temporal de los procesos, el control de estos, las instancias de mediación, las opiniones acerca de las innovaciones informáticas en la gestión de los expedientes, entre otras variables. También, indaga sobre los criterios que los operadores jurídicos asignan necesarios para la mejora operativa del sistema.

Además, se añadió al instrumento de confronte una pregunta relativa al desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de que los encuestados pudieran apreciar el criterio de aquella en fallos de relevancia social y económica para la sociedad. Esta variante aporta un elemento distintivo al trabajo, ya que permite dar cuenta de las perspectivas de valor de los profesionales encuestados, en cuanto a la administración de justicia en general más allá de la operatividad funcional de una jurisdicción en particular.

A partir de esta premisa han podido auscultar no solo parámetros de confianza, sino también la entidad de las variables que contribuyen con la desconfianza en el sistema de administración de justicia.

Todos estos contenidos tienen una sustantiva importancia para el análisis socio jurídico del derecho y de las instituciones judiciales. Tal como lo sugiere Salanueva en el introito de esta obra, la medición de la confianza de los abogados y las abogadas en los jueces y en la administración que les compete, debería ser cotejada en forma continua y sistemática, porque se trata de una información imprescindible para relevar la experiencia regular de la ciudadanía que entra en contacto con la organización judicial. Esto a su vez permite evaluar la eficacia/ineficacia de sus prestaciones e incluso, el grado de idoneidad de los funcionarios judiciales y de los cuadros e infraestructuras aplicadas a su tarea.

Resulta significativa la afirmación del desmoronamiento en los índices de credibilidad, respaldada en la obra por datos de diversas investigaciones acreditadas en el campo académico, que dan cuenta del continuo proceso de deterioro en la confiabilidad judicial. Este proceso, signado por el sostenido colapso de las condiciones materiales de vida de las poblaciones, resulta elocuente. Esta perspectiva se ve verificada al correlacionarse indicadores de deuda social, haciendo mérito de la pauperización continua de sectores de medios y bajos recursos. El trabajo no soslaya el hecho que el desmoronamiento en la credibilidad de la justicia es asestado por el continuo hostigamiento de las políticas gubernamentales, tanto para incidir en la respuesta jurisdiccional como para solucionar sus reyertas en el campo de la justicia. Los incidentes que afectan la independencia judicial y los obstáculos a su autonomía también son señalados en esta investigación como elementos para sopesar el grado de fiabilidad que globalmente se le infiere de esta administración.

Debo destacar también la adecuada aplicación metodológica en la recolección de datos, así como la esmerada descripción de éstos realizada en el primer capítulo del texto. Actis, Berisso y Shimko para su desarrollo conceptual, allí se apoyan en antecedentes empíricos y teóricos, dando cuenta de una sesuda pesquisa comparada para proveer al diseño investigativo, haciendo mérito de variables e indicadores que sistematizan estándares, a los que genéricamente suele denominarse barómetros. Esta labor les ha permitido realizar un estudio del arte en cuanto a los indicadores de confianza. Sin embargo, en este caso y tal como las autoras lo afirman, han ido en búsqueda de otro universo de indagación, proponiéndose rescatar opiniones, creencias y percepciones que pueden aportar solo quienes tienen un alto grado de calificación técnica pero que no ocupan una posición oficial dentro del sistema. Tal

como lo reseñan, la evaluación de la confianza asignada a la administración se ha hecho a partir de escalas de adhesión (acuerdo/desacuerdo) con atributos inherentes a la justicia. Este criterio ha permitido mensurar el grado de concomitancia entre saberes, creencias y experiencias ocupacionales en relación con la administración de justicia. La evaluación de la calidad de las sentencias y del nivel de influencia de los medios de comunicación, asimismo han contribuido para informar criterios de confianza conforme el cuadro de creencias relativas de los operadores. Por otra parte, al indagar sobre el control del buen funcionamiento de la Justicia, se revela la opinión de los encuestados sobre el resto de las instituciones a las que tienen asociada su credibilidad. En síntesis, la representatividad de la muestra, la eficiencia del cuestionario y el excelente procesamiento de datos, le asignan a este trabajo un singular valor de referencia para el estudio de las prácticas judiciales y la satisfacción con la respuesta jurisdiccional.

En cuanto a la fundamentación teórica, merece se señale una magistral labor de Orlor y Varela en el capítulo segundo, donde se capitaliza un bagaje conceptual sobre confianza institucional y sus factores de referencia, apoyándose en un compendio relevante de autores en la materia. El análisis de las distintas teorías no solo resulta instructivo, sino también es sugerente al momento de analizar las percepciones de confianza en el universo de operadores jurídicos objeto de esta investigación. Tal como ellos mismos lo aseveran, sirve para reflexionar "...de qué modo quienes tienen la legitimidad para litigar y lo hacen habitualmente, perciben su confianza en el sistema judicial". A partir de este acervo teórico, el análisis diferenciado de los bloques de preguntas relevadas, relacionando por un lado la idea de confiabilidad de la justicia en los encuestados y, por otro, los aspectos valorativos sobre la justicia que poseen estos, aportan un acierto metodológico. Su proyección gráfica en cuadros comparativos ofrece además una agradable y didáctica lectura que permite captar inmediatamente la relevancia de sus conclusiones. El material es profuso, bien construido y merece una rigurosa atención del lector, al que invito se sumerja en el contenido para atender las posibilidades del cruce de variables que el material aporta. Por otra parte, la relación entre la administración de justicia y los medios alternativos para la resolución de conflictos es desarrollada conceptualmente en el tercer capítulo. El análisis de los métodos de autocomposición realizado por Forastieri ilustra adecuadamente el sentido que han adquirido en la transformación de los

procedimientos para administrar controversia, instando a las propias partes a arribar a una solución responsable de sus conflictos. Frente a los métodos adversariales, las mecánicas autocompositivas interpelan al abogado a dejar a un lado su protagonismo, su predisposición antagónica, para instarlo a ubicarse en un espacio colaborativo a fin de contribuir con su asistencia en la consecución de un resultado satisfactorio común a las partes. En este trabajo se ha destinado parte del instrumento de recolección de la información para tratar de describir cuál es la percepción o el ideal que los operadores jurídicos tienen respecto de estas alternativas, y en definitiva el grado de confianza en la resolución de conflictos por estos medios. Ello, inmediatamente correlaciona sus respuestas con las percepciones que tienen acerca de la eficiencia procedimental, el hastío burocrático o el cuestionamiento de la honestidad de los magistrados, aspectos que ordinariamente amenazan la confianza en la vía judicial. La mínima participación de los profesionales encuestados en instancias de mediación pone de relieve la limitada ponderación que tienen de este mecanismo, al mismo tiempo que expone un importante espacio para recorrer al respecto en el departamento judicial investigado.

En lo relativo al control de la administración de justicia y qué organismo consideran los operadores jurídicos resulta idóneo al efecto, el instrumento de confronte ofrece una variedad opciones que proponen desde elencos oficiales a semi oficiales para seleccionar por su aceptación o rechazo. Entre ellos se encuentra el que constitucionalmente ejerce la superintendencia de la magistratura judicial, como el consejo de la magistratura; pero también variantes gremiales, como la colegiatura profesional, cónclaves académicos y comisiones internas de la judicatura; asimismo se ofrece variantes políticas, como comisiones de ciudadanos elegidos ad hoc o, comisiones legislativas. De los datos relevados sobre el total de respuestas, los autores del capítulo apuntan que se pone de relieve el aval de los operadores jurídicos a los organismos calificados técnica y gremialmente, desestimando la hipótesis de aquellos que sugieren algún tipo de interferencia política agonal o de interés corporativo de los magistrados. En el análisis de los datos que ofrecen Nuñez y Nuñez, se desprenden percepciones de los operadores acerca de la necesaria transparencia, tanto respecto del acceso a la magistratura como del ejercicio mismo de la judicatura, así como una sugestiva aceptabilidad de una representación directa de la ciudadanía en los órganos de control.

Por otra parte, la incorporación en la encuesta de una pregunta relativa a fallos de repercusión pública emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha surgido, según Perotti, de la necesidad de “contemplar la opinión de los profesionales del derecho sobre de las sentencias definitivas como un acto que culmina el proceso y que expresa en forma específica e individualizada la administración de justicia”.

En el capítulo quinto de la obra, la autora observa que tal premisa expone al encuestado a valorar su confianza en la justicia frente a un caso concreto. Al mismo tiempo, implícitamente le propone considerar la credibilidad en la justicia según la composición relativa de los miembros de la Corte, cuestión de particular importancia teniendo presente que dicho órgano históricamente se ha auto investido como custodio y garante de la constitución. Los fallos que componen la nómina de confronte son diversos e involucran cuestiones que van desde los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad hasta los derechos del consumidor. El grado de acuerdo o desacuerdo con éstos, más allá de las consideraciones técnicas de fondo y forma que los profesionales individualmente pudieren tener, en general ponen de manifiesto la conformidad en los casos en que se han convalidado los derechos de los afectados, tanto por relaciones de consumo, como por arbitrariedad de la administración pública o por impacto ambiental, y la disconformidad con aquellos en los que la Corte se ha ceñido a la discrecionalidad formal que posee, beneficiando a sectores desacreditados en la opinión pública. En ese sentido señala la autora cómo la repercusión y difusión de los casos en los medios de comunicación ponen de manifiesto la relación de éstos con la administración de justicia y cómo la formación de opinión pública impacta en la generación de confianza en la justicia. Esta conclusión, que a priori puede parecer intuitiva, queda convalidada a través del trabajo de compulsa realizado y consagra el valor de la investigación sociojurídica para corroborar -y si es el caso convalidar- hipótesis sugerentes sobre las dimensiones jurídicas.

Finalmente, es destacable en este texto que, a través del relevamiento efectuado en la investigación de campo se pueda acreditar la preferencia por la transparencia y capacitación de los funcionarios judiciales - tanto en el acceso como en el ejercicio de sus cargos-, como criterios prevalentes para el mejoramiento de la función de la justicia y de la confianza en su institucionalidad. También en éste trabajo, resultan muy significativos los comentarios de los abogados y las abogadas vertidos en el

instrumento de confronte que, si bien resultan difíciles de tabular, señalan su desasosiego con la administración de justicia, estado emocional que se ve fundamentado genéricamente en la reproducción de prácticas nepotistas para la selección de sus elencos, así como en la gestión diferencial de los procesos -y en el resultado de las sentencias-, en la medida que los actores se valgan de vínculos extrajudiciales con los magistrados. No se trata de contenidos que puedan acreditarse en un proceso judicial, pero puestas estas especulaciones en boca de operadores de la justicia cobran verosimilitud, lo que contribuye a erosionar aún más los niveles de confianza en el sistema.

Un último dato por señalar y que no quiero pasar por alto, involucra opiniones respecto de la informatización de los expedientes judiciales. El cotejo por años de antigüedad profesional en los deponentes es elocuente al registrar los niveles de resistencia al cambio. Tal resistencia deriva de las limitaciones para adaptarse a las nuevas tecnologías que adolecen genéricamente los profesionales más señeros. No se trata de un dato menor, porque en definitiva delata un universo de próximos excluidos del sistema.

En síntesis, del análisis de esta obra puedo destacar la encomiable labor realizada por la Dra. Olga Salanueva y su prestigioso equipo de investigación, tanto por la rigurosidad metodológica como por la calidad de las reflexiones vertidas en este libro. Sus consideraciones deberían ser tenidas en cuenta para el debate legislativo o en el seno de las corporaciones judiciales al plantear futuros escenarios de cambios -procedimentales o estructurales- en la administración de justicia, o para el diseño de próximas políticas públicas. Estoy convencido asimismo que el lector podrá encontrar en este trabajo una obra de indispensable consulta para ponderar contenidos relativos a la sociología de la administración de justicia y de las profesiones jurídicas. Es un texto que enriquece el bagaje disciplinar e indudablemente merece integrar la bibliografía de las cátedras de sociología jurídica de todo el país, lo que así espero pronto suceda.

Ruben H. Donzis, julio 2020